

Don José de Carvajal, y la Administración general del Estado demandada y en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real orden de veinte y siete de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco dictada por el Ministro de Ultramar y relativa á concesiones mineras en el islote "Caja de muertos".—Resultando que á las siete de la mañana del día cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro Don Alfredo L. Collado, vecino de Mayagüez, presentó nueve instancias dirigidas al Gobernador General de Puerto-Rico solicitando los registros mineros de diez y siete pertenencias de fosfatos calizos bajo la denominación de "Monserrate", "La Puntilla", "Rosario", "María Florinda", "Linda", "Catalina", "Tula" y "Carmela", situados en el islote titulado "Caja de muertos", término de Ponce, designando los linderos y superficies en las mismas instancias y acompañando á cada una de estas un plano del islote con indicación de la pertenencia ó pertenencias que comprendía y un depósito de sesenta pesos conforme á reglamento.—Resultando, que estas instancias fueron admitidas, publicándose en la "Gaceta" de Puerto-Rico los anuncios de ley.—Resultando, que en cinco de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro Don Miguel Porrata y Doria, vecino de Ponce, dirigió una instancia al Ministerio de Ultramar pidiendo se les concediera la explotación de los fosfatos existentes en el islote "Caja de muertos", bajo las condiciones que en la misma exponía.—Resultando, que reclamado el expediente á consecuencia de esta instancia por el Ministro, pasó á informe de la Junta Superior facultativa de Minería, la cual opinó sustancialmente que el fosfato calizo es objeto de la minería y se encuentra por tanto comprendido en la ley vigente de Puerto-Rico ó sea el Real Decreto de quince de Enero de mil ochocientos sesenta y siete; que Don Alfredo Collado presentó sus solicitudes cumpliendo las prescripciones legales, y que habiéndolo hecho ántes que Don Miguel Porrata, tenía aquél prioridad de derecho y debía seguir el expediente del mismo por sus trámites reglamentarios.—Resultando, que análogo parecer emitió el Negociado del Ministerio, y por Real orden de veinte y siete de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco, de acuerdo con la Subsecretaría, se dispuso: Primero. Que se desestimen las instancias de Don Miguel de Porrata y Don Alfredo L. Collado para la explotación de los fosfatos calizos del islote "Caja de muertos" y se cancelen los expedientes en que han sido formuladas. Segundo. Que se advierta y notifique á la Intendencia general de Hacienda de la Isla de Puerto-Rico que en lo sucesivo se abstenga de recibir solicitud alguna relativa á la concesión de explotaciones mineras. Tercero. Que se consideren desde luego denunciadas para el Estado á los efectos y para el caso de que se presentaran nuevos denunciadores, las pertenencias mineras que han sido objeto de este expediente; y Cuarto. Que el citado como dueño del terreno que constituye la isla "Caja de muertos" proceda por arriendo en subasta pública á la explotación en beneficio del Tesoro de Puerto-Rico de aquellos yacimientos de fosfatos calizos con sujeción al pliego de condiciones que se forme por el Ministerio previo dictamen de la Junta Superior facultativa de Minería respecto á las condiciones técnicas.—Resultando, que contra esta Real orden inició recurso contencioso-administrativo el Doctor Don José de Carvajal en nombre de la sociedad "J. Tornabells y Compañía" cesionaria de los derechos de Don Alfredo L. Collado, formalizando la demanda con la súplica de que se revoque la mencionada resolución ministerial, declarándola nula y sin efecto en cuanto desestima los registros de Don Alfredo L. Collado, para la explotación de las minas ya nombradas y manda cancelar los expedientes respectivos, así como en cuanto ordena que se consideren denunciadas aquellas por el Estado y que se proceda á su explotación por arriendo en subasta pública; declarando en su lugar subsistentes los mencionados registros y que en su día previa la tramitación correspondiente, se expida á favor de Don Alfredo L. Collado el título de propiedad de las repetidas minas.—Resultando, que á este escrito acompañó el Doctor Carvajal una certificación legalizada del Secretario del Gobierno General de Puerto-Rico, haciendo constar que en cada uno de los expedientes instruidos por Collado figura el plano del islote con indicación de las pertenencias que comprende.—Resultando, que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda pidiendo que el Tribunal se declare incompetente que no reúna la Real orden impugnada los requisitos exigidos por el artículo primero de la ley, ya por no existir derecho administrativo reconocido á favor del demandante, ya por no haberse lesionado ningún derecho que pudiera alegar, toda vez que se ha accedido á las pretensiones que dedujo en el expediente administrativo; y cuando no hubiese lugar á estas declaraciones, que se absuelva de la demanda á la administración y se confirme la Real orden impugnada.—Resultando, que recibido el pleito á prueba, á instancia del actor se reclamaron por conducto del Ministerio de Ultramar y se unieron á los autos dos certificaciones que expidió en veinte y nueve de Enero de mil ochocientos noventa y seis la Secretaría del Gobierno General de Puerto-Rico, haciendo constar una de ellas los números que en el libro talonario del Registro de minas tienen las nueve solicitudes presentadas por Don Alfredo L. Collado el cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro, y expresiva la otra de la fecha en que se expidieron por el Gobernador general las órdenes para que la "Gaceta oficial" de la isla publicara los nueve registros mineros, con inserción literal de las minutas de dichos oficios.—

Resultando, que expirado el período de prueba, se pusieron de manifiesto á las partes las diligencias practicadas por término de seis días, transcurrido el cual siguieron los autos el curso de reglamento.—Visto siendo ponente el Consejero Ministro Don José María Valverde. Visto el Real Decreto de quince de Enero de mil ochocientos sesenta y siete, estableciendo el régimen de la minería en la Isla de Puerto-Rico, que en su artículo primero dice: "Son objeto especial del ramo de minería todas las sustancias inorgánicas, metálicas, combustibles, salinas, fosfatos calizos, cuando se presenten en filones que exijan operaciones mineras, y las piedras preciosas que en la superficie ó en el interior de la tierra se presten á explotación"—Visto el artículo segundo del mismo Real Decreto que expresa: "La propiedad de las sustancias designadas en el artículo anterior corresponde al Estado, y nadie podrá disponer de ellas sin concesión expedida por el Gobernador superior civil".—Visto el artículo ochenta y uno del propio Real Decreto que declara: "Todos los expedientes que se instruyan para obtener concesiones en minería son puramente gubernativos. Se resuelven en definitiva por el Gobernador civil de la Isla".—Considerando que la Real orden de veinte y siete de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco, origen de este pleito, no ha sido objeto de impugnación en la parte de la misma que desestima las pretensiones de Don Miguel Porrata Doria, por lo que este Tribunal carece en absoluto de competencia para conocer de dicha parte. Considerando en cuanto á las pretensiones de Don Alfredo L. Collado, cuyos derechos representa hoy la sociedad demandante "J. Tornabells y Compañía" que por ser el fosfato calizo una de las sustancias que expresamente señala el artículo primero del Real Decreto de quince de Enero de mil ochocientos sesenta y siete entre los que son objeto especial del ramo de minería, es indudable que cuando se pretende en la Isla de Puerto-Rico una concesión de dicha sustancia, el procedimiento debe seguir los trámites y ultimarse ó resolverse por las autoridades que determina el expresado Real Decreto.—Considerando que según el artículo ochenta y uno del mismo, todos los expedientes que se instruyan para obtener concesiones en minería son puramente gubernativos y se resuelven en definitiva por el Gobernador civil de la Isla.—Considerando que en virtud de este categórico precepto, las instancias de Don Alfredo L. Collado solicitando diez y siete pertenencias mineras de fosfatos calizos en el islote titulado "Caja de Muertos", solo pudieron ser resueltas, previa su tramitación en legal forma, por el Gobernador General de Puerto-Rico, y al desestimarlas la Real orden de veintisiete de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco, conoció de un asunto que no era de su competencia, debiendo por lo tanto anularse dicha resolución ministerial y lo actuado en su cumplimiento, á fin de que el asunto sea ultimado por la Autoridad á quien corresponde. Considerando por último, que por haberse dictado con incompetencia la Real orden impugnada y haber podido la misma lesionar los derechos que invoca la sociedad "J. Tornabells y Compañía" como causa habiente de Don Alfredo L. Collado apoyándose en el Real Decreto referido de quince de Enero de mil ochocientos sesenta y siete es notorio que la jurisdicción de este Tribunal alcanza á declarar la nulidad de la Real orden en cuanto se refiere á dichos interesados, siendo improcedente por consecuencia la excepción opuesta por el Fiscal á la demanda.—Fallamos: que debemos desestimar y desestimamos la excepción de incompetencia alegada por el Fiscal, y debemos declarar y declaramos la nulidad de la Real orden de veintisiete de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco en la parte que ha sido objeto de impugnación en este pleito, y de las diligencias practicadas para llevarla á ejecución, mandando que vuelva el expediente al Gobierno General de Puerto-Rico, á fin de que sean resueltas en legal forma las pretensiones deducidas en aquel por Don Alfredo L. Collado, cuyos derechos ostenta hoy la sociedad "J. Tornabells y Compañía." Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la "Gaceta de Madrid" y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Oánido Martínez.—El Conde de Pallares.—José María Valverde.—Oayo Lopez.—Fermin H. Iglesias.—Publicación.—Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Don José María Valverde, Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que certifico como Secretario. Madrid veinte de Enero de mil ochocientos noventa y ocho.—L. Miguel de Cartells.—Y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo ochenta y tres de la ley orgánica de esta jurisdicción, expido el presente testimonio que se remitirá al Ministerio de Ultramar para los efectos de los artículos ochenta y tres y ochenta y cuatro de dicha ley. Madrid diez y seis de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho.—Julian Gonzalez Tamayo.—Hay una rúbrica.—Hay un sello que dice: "Consejo de Estado. Tribunal de lo Contencioso-administrativo." Es copia.—Madrid 14 de Marzo de 1898.—El Subsecretario, B. Quiroga.—Hay una rúbrica.

Es copia.—El Secretario del Gobierno General, B. Francia.

Por la Subsecretaría del Ministerio de Ultramar, bajo el número 207 y con fecha 28 de Marzo último, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden siguiente:

"Excmo. Sr.:—Por el Ministerio de la Gobernación se dice á este de Ultramar con fecha 18 de Febrero próximo pasado lo que sigue:—Excmo. Sr.:—Vistas las cuatro instancias que, fundándose en varias disposiciones de Ultramar y de la Península, y principalmente, en la base 5ª de las del Decreto de 6 de Febrero de 1874, y en la Real orden de Fomento de 29 de Abril de 1897, han dirigido al Ministerio de Ultramar y á éste de la Gobernación, los funcionarios del Cuerpo de Comunicaciones de la Isla de Cuba, supernumerarios en el de Telégrafos de la Península, Subdirector de Sección de 1ª clase, Don Eduardo Sobral y Piá, Jefe de Estación Don Luis Brunet y Armenteros y Oficiales los. Don Enrique Contreras y Croke y Don Eduardo Bolívar y Gonzalez, solicitando una disposición aclaratoria de la citada base 5ª en la que se determine la aplicación de la misma á las categorías administrativas que disfruten en Ultramar los empleados del Cuerpo de Telégrafos de la Península, en vez de aplicarla, exclusivamente, á las categorías telegráficas; Vista la Real orden de 25 de Enero último, con la que el Ministerio de Ultramar ha remitido á este de la Gobernación las susodichas cuatro instancias, y en la cual expresa que, lo verifica para que por este Departamento se adopte la resolución que estime procedente, toda vez que la ventaja que solicitan los cuatro funcionarios de referencia, caso de ser concedida, habría de tener efecto en la Península al cesar los recurrentes en el Cuerpo de Comunicaciones de la Isla de Cuba y ser aita en el de Telégrafos peninsular de que proceden; considerando que al solicitar que se aplique la base 5ª de las de 6 de Febrero de 1874, á las categorías administrativas que se disfrutaban en Ultramar, lo que se solicita, es, haciendo aplicación á los cuatro recurrentes, que el Sr. Sobral, hoy Subdirector de Sección de 1ª clase con 3.500 pesetas anuales, sea, al regresar de Cuba, Director de Sección de 1ª clase con 6.000; el Sr. Brunet, Jefe de Estación con 2.500, Director de Sección de 1ª clase con 4.000 y los Sres. Contreras y Bolívar, Oficiales los. con 2.000, Subdirectores de Sección de 1ª clase con 3.500, pretensión que resulta bastante exagerada; Considerando que, lo solicitado es, en la práctica, si no imposible por lo menos muy difícil de realizar, por que en los presupuestos de Telégrafos no están consignadas esas plazas supletorias, ni esos sueldos á ellas correspondientes, y no habría, por lo pronto, medio alguno de hacerlas efectivas, ni pagarlos cuando llegase el caso, mientras aquello no se verificase, no siendo los momentos actuales los más apropiados para tales aumentos; y considerando, de otra parte, que los recurrentes, y cuantos funcionarios de Telégrafos prestan sus servicios en Ultramar, han solicitado, voluntariamente, y por encontrar en ellos, sin duda alguna, verdaderas ventajas, sus actuales empleos, con las bases, del Decreto de 6 de Febrero de 1874, y que, mientras éstas se le cumplan, exactamente, no pueden tener fundamento aceptable sus reclamaciones; S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto, por la Dirección general de Correos y Telégrafos, se ha servido desestimar las mencionadas cuatro instancias de los Sres. Sobral, Brunet, Contreras y Bolívar; disponiendo al propio tiempo, que se les manifieste esta resolución por el Ministerio de Ultramar, del cual hoy dependen, y por cuyo conducto se han recibido aquellas; y haciéndola extensiva, para en los casos iguales que pudieran presentar se a los funcionarios del Cuerpo de Telégrafos Peninsular que sirven ó sirvan, en los de Comunicaciones de Puerto-Rico y Filipinas.—De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos que correspondan.—Lo que de la propia Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Ultramar, traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes."

Y acordado su cumplimiento por S. E. con fecha 13 del actual, de su orden superior se publica en la "Gaceta" para general conocimiento.

Puerto-Rico, 16 de Abril de 1898.—El Secretario del Gobierno General, B. Francia. [945]

GOBIERNO INSULAR DE LA ISLA DE PUERTO-RICO

Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia y Gobernación

Subsecretaría

DECRETO.

A propuesta del Secretario de Gracia y Justicia y Gobernación:

Queda aceptada la renuncia presentada por Don Abelardo de Célis, del cargo de Delegado de la Isla de Culebras.

San Juan de Puerto-Rico, en el Palacio de Santa Catalina á diez y seis de Abril de mil ochocientos noventa y ocho.—MACÍAS.—L. Muñoz Rivera.—Lo que de orden del Ilmo. Sr. Secretario del Despacho, se publica en la "Gaceta" para general conocimiento.—Fecha ut antea.—El Subsecretario, José de Diego. [954]

DECRETO.

A propuesta del Secretario de Gracia y Justicia y Gobernación: